



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-015-2022-00438-01
Demandantes:	María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo
Demandada:	AFP Protección S.A.
Asunto:	Apelación de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín
M. ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de sobrevivencia: Dependencia económica de los padres del causante

**Medellín, noviembre veintisiete (27) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, respecto de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís

Emilio Álvarez Agudelo contra la AFP Protección S.A., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-05-015-2022-00438-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

Los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo instauraron demanda ordinaria laboral contra la AFP Protección S.A. pretendiendo el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su hijo, el pensionado Luís Eduardo Álvarez Castrillón, y el pago de las mesadas comunes y adicionales que se hubieren causado desde la fecha de su fallecimiento, con los intereses de mora, o en subsidio la indexación, y las costas del proceso.

En respaldo de tales pedimentos los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo afirmaron que eran los padres del señor Luís Eduardo Álvarez Castrillón, fallecido el 16 de noviembre de 2020, quien se encontraba pensionado por invalidez, a cargo de la AFP Protección S.A.

Adujeron que el causante era soltero y no tenía hijos, que convivía con ellos, su hermana Gladis Aleida Álvarez, y cuatro sobrinos menores de edad; que desde que inició su vida laboral contribuía económicamente para cubrir los gastos del hogar; que aportaba gran parte el dinero necesario para sufragar el mercado, los servicios públicos, y los demás gastos de la familia; y que adquirió una póliza con la aseguradora Cardif Colombia Seguros Generales S.A. en beneficio de su madre.

Sostuvieron que la señora María Rosalba Castrillón Quiroz siempre ha sido ama de casa, y únicamente posee el inmueble en el que habita la familia, el cual adquirió por sucesión; que el señor Luís Emilio Álvarez Agudelo ya estaba pensionado por vejez para la época del fallecimiento del causante, pero tiene muchas deducciones sobre la mesada por concepto de préstamos; y que la señora Gladis Aleida Álvarez,

no laboraba y tampoco recibe ayuda económica de terceras personas, ni siquiera de los padres de sus hijos.

Finalmente, informaron que solicitaron de la AFP Protección S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, prestación que fue denegada el 08 de febrero de 2021 porque “... *sin el aporte del afiliado los padres pueden subsistir sin ser vulnerado el mínimo existencial sin el aporte del afiliado los padres pueden subsistir sin ser vulnerado el mínimo existencial*”, y en su lugar les ofreció una devolución de saldos por \$237.555.488 (doc.01, carp.01).

## 1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado judicial legalmente constituido, la **AFP Protección S.A.** admitió que el joven Luís Eduardo Álvarez Castrillón falleció el 16 de noviembre de 2020; que el mismo venía percibiendo una pensión por invalidez, reconocida desde el 25 de mayo de 2016, en suma equivalente a un (1) SMLMV; y que el 30 de diciembre de 2020 los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo, acreditando la condición de padres del causante, solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia, prestación que fue denegada por haberse comprobado que los mismos no dependían económicamente del pensionado fallecido.

Informó que los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo recibieron la suma de \$237.555.885, en un 50% para cada uno, por concepto de devolución de saldos con ocasión de la muerte del pensionado Luís Eduardo Álvarez Castrillón; y explicó que en la investigación administrativa realizada por intermedio de la sociedad Decrim Lawyers Group S.A.S. se constató: (i) que el señor Luís Emilio Álvarez Agudelo cuenta con ingresos propios derivados de la pensión por vejez que percibe desde hace más de diez (10) años; (ii) que la señora María Rosalba Castrillón Quiroz figura como beneficiaria en el subsistema general de salud de su cónyuge, el señor Luís Emilio Álvarez Agudelo, y no del causante; (iii) que los demandantes cuenta con vivienda propia, por lo que

no incurren en gastos de alojamiento; y (iv) que la hermana del causante Gladis Aleida Álvarez, junto con sus hijos Cristian Alonso Arboleda Álvarez y Luís Gustavo Arboleda Álvarez, suministran la suma de \$300.000 para contribuir con los gastos del hogar; razones por las que aseveró que el aporte que realizaba el señor Luís Eduardo Álvarez Castrillón solo constituía una ayuda o mera colaboración para los padres, sin que se configurara una relación de subordinación económica entre aquellos.

De consiguiente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y de mérito excepcionó la inexistencia de la obligación; imposibilidad del reconocimiento de la pensión de sobrevivencia pretendida por los demandantes; cobro de lo no debido; pago y compensación; improcedencia de condena al pago de intereses moratorios; buena fe; y prescripción (doc.04, carp.01).

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 17 de octubre de 2023, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación; absolvió a la AFP Protección S.A. de las pretensiones incoadas por los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo; y condenó en costas a los demandantes en favor de la entidad demandada (doc.09, carp.01)

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

La poderhabiente judicial de los señores **María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo** interpuso el recurso de alzada en procura de que se revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar, se acojan las pretensiones de la demanda, sustentando que conforme a las reglas sentadas por la jurisprudencia, sus representados no requerían acreditar una dependencia económica absoluta para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivencia; que la ausencia del aporte que les suministraba el causante para sufragar los gastos de alimentación y servicios

públicos, entre otros, afectó considerablemente el sostenimiento del hogar; que la demandante nunca ha laborado, y siempre ha sido ama de casa; que el demandante recibe una pensión equivalente a un (1) SMLMV afectada por créditos que se adquirieron antes de la muerte del causante, y con lo que resta no se alcanzan a solventar los gastos del hogar; que sus poderdantes no tienen los recursos suficientes para acceder a los medios materiales necesarios para tener una vida digna.

Aseveró que la independencia económica no se alcanza por el simple hecho de tener una vivienda, máxime en este caso, que se trata de una casita que poco a poco fueron construyendo, y no les genera ninguna renta ya que es la misma que ellos habitan; que el hijo proveía un porcentaje importante, relevante y periódico para su sostenimiento, conforme a la prueba recabada; que los testigos conocían de primera mano la situación familiar, y fueron coherentes y coincidentes, tanto en la investigación administrativa, como en el trámite judicial, en la discriminación de los gastos del hogar, y el monto que aportaba el causante y su padre, que eran los que sostenían la familia, ya que la hermana del causante solo comenzó a colaborarles después de la muerte de aquel; que el aporte que brindaba el causante era superior al 50% de los gastos del hogar; que sus poderdantes realmente estaban subordinados económicamente al causante, y por lo tanto, son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia deprecada; y que la negativa en el reconocimiento de la prestación no estuvo justificada (desde el minuto 02:54:40, doc.08, carp.01).

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para alegar de conclusión, la vocera judicial de los señores **María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo** reiteró *in extenso* los argumentos esbozados con la sustentación del recurso de apelación, insistiendo en que el aporte recibido por sus prohijados de parte del pensionado fallecido, y con el que se cubría el 50% de los gastos del hogar, era vital, prevalente, continuo, significativo y determinante para el sostenimiento de la familia (doc.03, carp.01).

Por su parte, la procuradora judicial de la **AFP Protección S.A.** solicitó que se mantenga en firme la decisión que absolvió la entidad que representa, arguyendo que la dependencia económica en los términos establecidos por la Ley y la jurisprudencia para que los padres del pensionado sean beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, no se configura en el caso de los demandantes, conforme a lo probado mediante los documentos y declaraciones recabadas (doc.04, carp.01).

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que fueron objeto de apelación por los señores **María Rosalba Castrillón Quiroz** y **Luís Emilio Álvarez Agudelo**, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

### **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA**

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que el señor Luís Eduardo Álvarez Castrillón nació el 21 de abril de 1980 (págs.23-24, doc.01, carp.01), se afilió a la AFP Protección S.A. el 09 de septiembre de 2003 (pág.27, doc.04, carp.01), cotizó 148,14 hasta el 30 de enero de 2017 (págs.60-63, doc.04, carp.01); fue pensionado por invalidez, a partir del 25 de mayo de 2016, con una mesada equivalente a un (1) SMLMV (págs.36-38, doc.04, carp.01), y falleció el 16 de noviembre de 2020, por causas de origen no profesional (págs.15-16, doc.01, carp.01).

- Que los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo son los padres del finado Luís Eduardo Álvarez Castrillón (págs.23-24, doc.01, carp.01), y bajo tal condición, el 10 de diciembre de 2020 le solicitaron a la AFP Protección S.A: el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia (págs.41-49, doc.04, carp.01), prestación que fue denegada el 08 de febrero de 2021 porque “... *fue posible comprobar que sin el aporte del afiliado, los padres pueden subsistir sin ser vulnerado el mínimo existencial*” (págs.29-30, doc.01, carp.01).

- Que mediante la Escritura Pública No.16 del 07 de enero de 2022 de la Notaria Catorce de Medellín, corregida a través de la Escritura Pública No.102 del 07 de febrero de 2022 de la misma notaria, se adelantó el trámite de sucesión intestada del señor Luís Eduardo Álvarez Castrillón, únicamente en favor de los demandantes, en hijuelas iguales (págs.52-57, doc.04, carp.01); y que cada uno de ellos recibió de la AFP Protección S.A. la suma de \$117.575.481, en la fecha 08 de marzo de 2022, por concepto de devolución de saldos por el fallecimiento del causante (págs.58-59, doc.04, carp.01).

### **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si a los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su hijo, el pensionado Luís Eduardo Álvarez Castrillón, efecto para el que habrá que establecer si aquellos dependían económicamente de éste?

### **2.4.- TESIS DE LA SALA**

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual los demandantes realmente no son beneficiarios de la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su hijo, siendo que en lugar de haberse acreditado que la ayuda o

colaboración que éste les brindaba era relevante, esencial y preponderante para el sostenimiento de ambos, quedó demostrado que la madre del causante en realidad depende económicamente de su cónyuge, padre del de cujus. De consiguiente, la sentencia absolutoria de primera instancia será **confirmada**.

## 2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

Ahora bien, tal y como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivencia debe establecerse, por regla general, a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado (véase las sentencias CSJ SL Rad. 36135 de 2009, SL Rad. 42828 de 2011, SL7358-2014, SL1503-2018, SL2843-2021), y como el fallecimiento del pensionado Luís Eduardo Álvarez Castrillón ocurrió el 16 de noviembre de 2020 (págs.15-16, doc.01, carp.01), debe aplicarse el régimen legal contenido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que dispone:

*“ARTICULO. 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:*

- 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,*
- 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”*

Por su parte, el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece:

*“ARTICULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*

*(...)*

*d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste*

Sin embargo, cumple memorar que la expresión “*de forma total y absoluta*” prevista en la anterior disposición normativa, fue declara inexecutable por la Corte Constitucional en la Sentencia C-111 de 2006, considerando:

*“Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha sido concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la subordinación de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la relación de subordinación que fundamenta la citada prestación.*

(...)

*Por lo anterior, la Corte declarará inexecutable la expresión “de forma total y absoluta” prevista en la disposición acusada, para que, en su lugar, sean los jueces de la República quienes en cada caso concreto determinen si los padres son o no autosuficientes económicamente, para lo cual se deberá demostrar la subordinación material que da fundamento a la pensión de sobrevivientes prevista en la norma legal demandada”.*

En igual sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó:

*“En punto a la dependencia económica que exige el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para tener por beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los ascendientes del causante, como con acierto lo asentó el Tribunal, de tiempo atrás esta Corporación ha adoctrinado, que ella no implica una sujeción total y absoluta del posible beneficiario a los ingresos económicos que percibía del causante, por manera que no excluye la existencia de distintas fuentes de recursos, propios o provenientes de otras personas, pues no es necesario que se encuentre en estado de pobreza o indigencia (sentencias CSJ SL400-2013, CSJ SL3630-2014y CSJ SL964-2023, entre muchas otras)”*

Lo anterior, sin que ello signifique que no sea necesario que exista una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, de manera que,

si bien los padres pueden percibir ingresos adicionales, estos deben ser insuficientes para garantizar la independencia económica:

*“Tal lectura no se rebela contra la interpretación fijada por esta Corporación, según la cual, la dependencia económica que exige la norma en cita no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido, no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes, la única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas (CSJ SL 31346, 12 feb. 2008, reiterada en la CSJ SL2800-2014 y la CSJ SL6558-2017).*

(...)

*Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017).*

*Es por lo anterior, que se ha puntualizado jurisprudencialmente que la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del «buen hijo», no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley”.*  
(SL1243-2019).

Finalmente, también importa señalar que la jurisprudencia tiene por adocinado desde antaño que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres:

*“Ahora bien, la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a quien la alega, en este caso el padre de la afiliada fallecida, y el convocado deberá desvirtuar esa sujeción material, mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autonomía financiera del progenitor (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026)” (CSJ SL964-2023).*

## 2.6.- CASO CONCRETO

La dependencia económica de los padres respecto de los hijos, debe ser auscultada en cada caso concreto, sin que existan reglas de comprobación general. Igualmente es un concepto que está vinculado al mínimo vital cualitativo de los padres, de manera que el aporte del hijo, sea determinante para mantener el mismo, con independencia del quantum de los ingresos propios o suministrados por terceros.

De consiguiente, la Sala colige que a los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo, en su comprobada condición de padres supérstites del pensionado Luís Eduardo Álvarez Castrillón (págs.23-24, doc.01, carp.01), les concernía la carga de probar que dependían económicamente del causante, y con tal propósito en el interrogatorio de parte la señora **María Rosalba Castrillón Quiroz** expuso que nunca ha trabajado, y siempre ha sido ama de casa; que su esposo se encuentra pensionado por vejez como desde el año 2010; que siempre ha sido beneficiaria de su cónyuge en el Sistema General de Salud; que la casa en la que vive con su esposo, y en la vivía con su hijo es de su propiedad; que la suegra le dio el terreno y con su esposo la fueron construyendo; que era ella quien pagaba la funeraria que cubrió los gastos del entierro de su hijo; que para la fecha en que falleció el causante el grupo familiar estaba conformado por ella, su esposo, el causante, otra hija, y cuatro nietos; que en ese tiempo mercaban con \$500.000 y pagaban \$250.000 de servicios públicos; que el causante le entregaba \$500.000 mensuales en efectivo, más de la mitad de lo que él recibía; que con ese dinero compraba el mercado y pagaba los servicios; que su otra hija, Gladis Álvarez, no aportaba casi porque estaba desempleada, solo le resultaba uno que otro día en la semana para hacer aseo en casas; que el mayor de sus nietos, Cristian Arboleda, tenía 21 años, el segundo, Gustavo Arboleda, tenía 20 años, el tercero, Maicol Estiven, tiene 11 años de edad, y la cuarta, María José, tenía 3 años; que sus dos (2) nietos mayores no trabajan, solo de vez en cuando descargaban ladrillos; que transcurrido un (1) año del fallecimiento del causante, su hija Gladis Álvarez consiguió un empleo, y le colaboraba con \$300.000 mensuales, pero solo le duró seis o siete meses, y actualmente no está trabajando; que cuando falleció el causante, su nieto mayor Cristian Arboleda consiguió empleo, y actualmente

dependen de lo que él aporta; que su esposo tiene créditos con cooperativas como por \$15.000.000, los cuales adquirió antes de que falleciera el causante, para hacer unos arreglos en la casa; que los gastos del hogar se solventaban con lo que ganaban su esposo y su hijo; que su esposo aportaba \$400.000 mensuales; que el causante no tuvo esposa ni hijos, y solo veía por ellos; que su hijo estaba pensionado desde el año 2016, pero antes de eso, trabajó mucho tiempo en una ladrillera; que después de pensionarse eventualmente trabajaba manejando un carro; y que contribuía con los gastos del hogar antes y después de pensionarse (desde el minuto 00:19:45, doc.08, carp.01).

Por su parte, el señor **Luís Emilio Álvarez Agudelo** indicó que es pensionado desde hace 12 años; que su esposa es beneficiaria suya en la Nueva EPS; que el inmueble en el que viven es de su cónyuge; que aquella cubrió los gastos fúnebres del causante; que para la fecha en que éste falleció el grupo familiar estaba conformado por él, su esposa, el causante, su otra hija, Gladis Álvarez, y cuatro nietos, hijos de Gladis Álvarez; que los gastos del hogar oscilaban entre los \$700.000 y \$800.000, discriminados en \$300.000 o \$350.000 para servicios públicos, y \$500.000 o \$600.000 para mercado; que el causante era pensionado por invalidez, y aportaba \$400.000 mensuales, con los que pagaban la comida, los servicios, alguna ropita, y se le hacían *cositas* a la casa; que después de pensionarse su hijo continuó trabajando un tiempo, manejando un carro; que su otra hija Gladis Álvarez, hacia aseo en casas cada quince días o una vez al mes, y les aportaba lo que se ganaba; que después de que falleciera el causante, aquella empezó a darles un aporte de \$300.000 mensuales; que ninguno de sus nietos trabajaba para la época en que falleció su hijo; que para esa época tenía deudas financieras que adquirió para arreglar la casa y atender algunos gastos; que las deudas eran por \$1.000.000 o \$2.000.000, que pagaba en cuotas de \$500.000 que le deducían de la pensión; que desde que murió su hijo viven de lo que le queda de la pensión, y lo que les ayuda un nieto, Cristian Arboleda; y que el causante aportaba para los gastos del hogar desde antes de pensionarse, cuando aún trabajaba (desde el minuto 00:49:50, doc.08, carp.01).

Pese a lo anterior, se debe advertir que la declaración rendida por la demandante no tiene la fuerza de convicción suficiente para acreditar o desvirtuar la ocurrencia de los hechos objeto de debate, siendo que las partes no le es dable producir sus propias pruebas, es decir “... *la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio*” (CSJ SL17191-2015, SL1024-2019, SL3308-2021, SL1744-2023).

En el análisis de la prueba testimonial recabada, se tiene que el señor **Fidel Antonio Velásquez Cataño**, dijo que el señor Luís Emilio Álvarez Agudelo es primo hermano de su esposa Dioselina Agudelo Torres, y la señora María Rosalba Castrillón Quiroz es la cónyuge de aquel; que el hijo de aquellos era pensionado por invalidez, y falleció hace tres (3) años; que los demandantes solo tuvieron dos hijos, Luis Eduardo y Gladis Aleida, y tienen cuatro nietos, hijos de la *muchacha*; que el demandante está pensionado por vejez, y era el que sostenía el hogar antes de que se pensionara el causante, y cuando éste recibió la pensión, también empezó a colaborarles; que cuando Gladis Aleida trabajaba también les ayudaba con el diario de la comida; que el causante no siguió trabajando después de pensionado; y que el causante le decía que destinaba entre \$400.000 y \$500.000 para los gastos del hogar (desde el minuto 01:14:40, doc.08, carp.01).

Sin embargo, se relievra que el testigo se contradijo con los demandantes, cuando afirmó que el causante solo empezó ayudar a sus padres cuando fue pensionado por invalidez, que no volvió a trabajar después de que recibió la pensión y que la hermana Gladys Aleida también hacía aportes cuando laboraba; aunado a que durante toda la declaración se dejó ver poco concentrado, y le faltó espontaneidad, claridad y exactitud al momento de responder las preguntas, siendo que muchas veces referenció hechos distintos a los preguntados, incluso irrelevantes para el caso.

De otro lado, el señor **Cristian Alonso Arboleda Álvarez**, manifestó que es el nieto mayor de los demandantes, y sobrino del causante; que siempre dependió económicamente de su abuelo y de su tío; que se rebuscaba cualquier cosa

haciendo viajes, pero se ganaba \$25.000 o \$30.000 y los destinaba para *mecatear*; que su tío falleció hace tres (3) años, y en ese momento empezó a enviar hojas de vida para conseguir un empleo; que hace tres meses trabaja en una ladrillera, pero antes de eso no trabajaba, sino que dependía de sus abuelos; que desde que está trabajando les ayuda a sus abuelos; que su tío continuó trabajando manejando un carrito después de pensionado; que su abuelo y su tío aportaban \$400.000 cada uno para los gastos de la casa; que su mamá no conseguía trabajo, solo la llamaban una o dos veces al mes para hacer aseo; que desconoce cómo se repartían los gastos de la familia; que su abuelo tenía *apuntada* a su abuela a la salud de la pensión, y su mamá y sus hermanos estaban afiliados al Sisben; que el causante no tenía esposa ni hijos, y la ayuda que le brindaba a la familia era muy necesaria; que su abuelo y su tío eran la cabeza de la casa, y eran los que pagaban los servicios, el mercado, y la ropa; que su abuela nunca ha aportado para los gastos del hogar; que su padre, ni el padre de sus hermanos aporta ni ha aportado para el sostenimiento económico del hogar; que los servicios costaban \$300.000, y el mercado unos \$500.000; que el demandante tiene unos prestamos que hizo para hacer unos arreglos en la casa, los cuales tenía con anterioridad al fallecimiento del causante; y que su mamá nunca ha trabajado de forma constante, y por ello, nunca ha realizado aportes continuos para la familia (desde el minuto 01:35:05, doc.22, carp.01).

Empero, es del caso tener en cuenta que este testigo también se contradijo con los demandantes, cuando afirmó que su mamá, la señora Gladis Aleida Álvarez Castrillón, nunca ha trabajado de forma constante, y por ello, no aportaba al sostenimiento del hogar; adicionalmente, refirió que el demandante, junto con el causante, eran quienes solventaban los gastos de las ocho (8) personas que conformaban el hogar.

Adicionalmente, se constata que en el plenario reposa la **investigación administrativa** adelantada por la AFP Protección S.A., a través de la empresa Decrim Lawyers Group S.A.S., en la que se concluyó *“El causante aportaba la suma de \$400.000, el reclamante 2 aporta \$400.000 cantidad está que se distribuía para gastos del hogar así: \$500.000 alimentación, luz \$80.000, agua \$90.000, internet \$100.000, parabólica*

*\$30.000. Se tuvo conocimiento que lo que le quedaba de salario al causante se lo daba la reclamante 1 para sus gastos personales y gastos en general. Posterior al siniestro la hermana del causante Gladys y sus sobrinos Cristian y Luis Gustavo colaboran actualmente con la suma de \$ 300.000 y obviamente con los \$400.000 que siempre aporta el reclamante 2, quedando los gastos de esta manera: alimentación \$400.000, luz \$80.000, agua \$90.000, internet \$100.000, parabólica \$30.000” (págs.64-75, doc.04, carp.01).*

En glosa de todo lo anterior, se tiene acreditado que para la fecha en que falleció el causante, en efecto, su hogar estaba conformado por ocho (8) personas, el causante Luis Eduardo Álvarez Castrillón, su padre Luis Emilio Álvarez Agudelo, su madre María Rosalba Castrillón Quiroz, su hermana Gladis Aleida Álvarez Castrillón, y sus cuatro (4) sobrinos Cristian, Gustavo, Maicol Estiven y María José; que los pretensores tenían casa propia y tenían garantizados los gastos de salud y los restantes egresos del hogar ascendían a la suma de \$800.000, discriminados en \$500.000 para alimentación y \$300.000 para servicios públicos, los cuales era sufragados por Luis Eduardo Álvarez Castrillón y Luis Emilio Álvarez Agudelo, en partes iguales, con los recursos provenientes de la pensión de invalidez y vejez que respectivamente percibían; y que los otros miembros del grupo familiar, de los cuales solo dos (2) eran menores de edad, no realizaban ningún aporte, según y conforme lo indicado en las pruebas recabadas en el proceso.

En virtud de ello, esta corporación educe que los señores María Rosalba Castrillón Quiroz y Luis Emilio Álvarez Agudelo realmente no dependían económicamente del pensionado Luis Eduardo Álvarez Castrillón, en la medida en que con los ingresos del señor Álvarez Agudelo, tenían garantizado su mínimo vital, TENÍAN vivienda propia y cobertura en salud y el aporte que el hijo realizaba estaba destinado a sufragar, no los gastos de sus padres, sino más bien, sus propios gastos y contribuir con los gastos de su hermana y sus cuatro sobrinos, quienes no prestaban ninguna ayuda para el sostenimiento económico del hogar, siendo éstos lo que en realidad dependían económicamente de su aporte, en tanto que, los recursos que proveía el padre, eran suficientes para atender sus propios gastos y los de su cónyuge, la madre del causante.

En tal sentido, se constata que el señor Luís Emilio Álvarez Agudelo fue pensionado por Colpensiones E.I.C.E., mediante la Resolución 349947 de 2015, por el riesgo de la vejez, y destacándose que recibe una mesada equivalente a un (1) SMLMV, más incrementos por personas a cargo, y como en el plenario se evidenció que el mismo no tiene hijos menores de edad, ni hijos mayores inválidos, se infiere que dicho incremento fue reconocido, precisamente, por tener a cargo el sostenimiento económico de su cónyuge, la señora María Rosalba Castrillón Quiroz, evidenciándose con ello que ésta en realidad se encontraba subordinada a su esposo, y no a su hijo; y que aquel, en lugar de depender económicamente del causante, tenía una relación de subordinación predominante con su cónyuge, siendo irracional admitir que quien suple las necesidades económicas de su cónyuge y aporta para el sostenimiento de su hija y nietos, es a su vez dependiente económico de otro hijo.

De otra parte, tampoco se acreditó el monto de los prestamos adquiridos por el padre del causante, aunado a que este afirmó que estos tenían una cuantía de \$1.000.000 y \$2.000.000 de pesos, mientras su cónyuge señaló que los créditos eran de \$15.000.000.

Finalmente, importa destacar que, aunque la pensión de sobrevivientes fue consagrada con el propósito de que el grupo familiar del afiliado fallecido asegurara su subsistencia en condiciones dignas, y no quedara en una situación de desamparo, lo cierto es que los beneficiarios de dicha prestación, a falta de cónyuge, compañera o hijos con derecho, son únicamente los padres, y que los hermanos y los sobrinos solo podrían ser beneficiarios de la prestación en caso de invalidez, y siempre que dependieran económicamente del afiliado, supuestos que no corresponden a los acreditados en el proceso, por lo que, la dependencia que Gladis Aleida Álvarez Castrillón, y sus hijos Cristian, Gustavo, Maicol Estiven y María José, pudieren tener respecto del causante, no es objeto de consideración a efectos de afincar el derecho de María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo al reconocimiento de la prestación pensional deprecada.

Así las cosas, lo procedente será confirmar el fallo absolutorio de primer grado. Costas en esta instancia a cargo de María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de alzada, se fijan como agencias en derecho, en favor de la AFP Protección S.A. la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV, conforme a lo reglamentado por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

**1.- Se CONFIRMA** la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo contra la AFP Protección S.A.


**2.-** Costas en esta instancia a cargo de María Rosalba Castrillón Quiroz y Luís Emilio Álvarez Agudelo y en favor de la AFP Protección S.A.; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

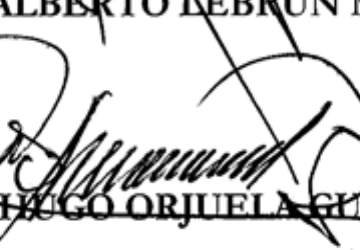
**3.-** Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.


El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3º literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad

Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**